



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen Jurídico

Número:

Referencia: EXPTE-2018-00647608-APN-SIGEN -AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

Vuelven las presentes las presentes actuaciones a consideración de esta Asesoría Letrada, por las cuales se requiere opinión sobre el proyecto de Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Acceso Norte, a celebrarse entre la Concesionaria AUTOPISTAS DEL SOL S.A. y el Estado Nacional, en el marco de lo previsto en la Cláusula Séptima del Acuerdo de Renegociación Contractual ratificado por Decreto N° 296/06 y conforme lo dispuesto por el Decreto N° 367/16.

-I- NUEVOS ANTECEDENTES.-

1. Los antecedentes de la cuestión y el marco normativo contractual fueron explicitados suficientemente en las anteriores intervenciones de esta GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS a través de los Dictámenes Nros. 62070 de fecha 28 de diciembre de 2016, 63167 de fecha 3 de mayo de 2017 y 64573 de fecha 4 de septiembre de 2017, a los que procede remitirse brevitatis causae.

2. Con posterioridad a los citados dictámenes, se requirió la intervención de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, la cual se expidió conforme los términos que surgen del Dictamen IF-2017-34134193-APN-PTN de fecha 21 de diciembre de 2017 respecto a la continuidad del trámite de aprobación del Acuerdo Integral, entendiendo en principio que: “Resulta jurídicamente viable la prosecución del trámite de aprobación del acuerdo alcanzado entre el Estado Nacional y AUSOL. La decisión adoptada en relación con las variables que se utilizarán para recomponer la ecuación económico financiera del contrato que vincula al Estado Nacional con AUSOL mediante la extensión del plazo contractual y, consecuentemente, la realización de un balance transaccional de los reclamos recíprocos, y el tratamiento dado a la totalidad de las prestaciones que se pueden denominar constitutivas del acuerdo (lapso que abarca la prórroga, penalidades, tarifas, mecanismos de actualización tarifaria, desistimientos, garantías de indemnidad, etc.) se encuentran dentro de las herramientas razonables a utilizar en el marco de la renegociación, no resultando competente, esta casa, para valorar las cuantías de cada uno de los rubros consensuados”.

Asimismo, el asesoramiento en análisis sugirió considerar las recomendaciones y salvedades formuladas en relación con determinados aspectos del proyecto de Acuerdo Integral, a cuyos términos corresponde remitirse y no se reproducen en mérito a la brevedad.

Sin embargo, corresponde destacar que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN advirtió la ausencia de un informe técnico integral exhaustivo con el correspondiente respaldo documental que valide la información respecto del quantum del Acuerdo Integral.

Asimismo, señaló que debería excluirse del Acuerdo Integral definiciones que impliquen asunción de responsabilidad por parte del ESTADO NACIONAL.

Por otro lado, propuso respecto de la celebración de la audiencia pública en la cual se debata la metodología de fijación de tarifas, prevista en la cláusula de redeterminación de tarifas, que la misma pudiera tener efectos por los próximos 13 años, y que cada ajuste tarifario anual que se realice conforme a ella, lo preceda un procedimiento de publicidad previa.

Por su lado, agregó que: “La renegociación aquí propuesta, que cuenta con antecedentes para aplicar el Mecanismo de Monitoreo de Costos, no es ajena a incorporar cláusulas de ajuste o redeterminación tarifaria que respeten una metodología de cálculo inicial que haya sido debidamente debatida en audiencia pública”.

Por otra parte, advirtió que la extensión del condicionamiento incorporado en el artículo 15.6 del Acuerdo Integral desnaturaliza el carácter novatorio y definitivo de la renegociación alcanzada, así como las renunciaciones y desistimientos regulados.

A mayor abundamiento, sostuvo que “El objetivo de incorporar un incentivo al cumplimiento, de la manera en la cual se lo está regulando aquí, podría juzgarse desproporcionado o alejado del carácter transaccional que ha marcado el proceso de renegociación que se está llevando a cabo. En este sentido, y sin que este comentario implique validación alguna del quantum propuesto, se sugiere realizar un esfuerzo de negociación adicional con el objeto de suprimir la cláusula 15.6, modificándola por una garantía distinta para el cumplimiento del ACUERDO INTEGRAL y/o el respecto por el ACUERDO INTEGRAL económico que transaccionalmente allí se pacta, es decir, un pago de u\$s 499.000.000 ... al 8% anual, en un plazo de 13 años”.

Seguidamente, señaló que, desde el punto de vista formal, la cláusula 15.4 (a) merecería una mínima precisión “... para evitar eventuales equívocos respecto de si la obligación a la cual se sujeta dicho plazo sería la de presentar los documentos que acrediten el compromiso de los accionistas, o si en ese plazo, los accionistas principales deben ejecutar los compromisos asumidos”.

Sobre este punto, señala finalmente que, la acreditación de que efectivamente ocurrió el hito del 15.3 (presentación de los compromisos de los accionistas principales) se regula bajo el artículo 15.4 (a), por lo que la PTN consideró que podría incorporarse una referencia a este último artículo en la norma que regula la entrada en vigencia.

Por otra parte, destacó que el presente trámite deberá contar con el asesoramiento jurídico del MINISTERIO DE TRANSPORTE “... recaudo éste necesario -normalmente- con carácter previo a intervención de este Organismo Asesor, por tratarse en la especie de una cuestión vinculada al ejercicio de competencias de organismos descentralizados de su ámbito (DNI y OCCOVI) ...”, y también con el correspondiente al MINISTERIO DE FINANZAS, conforme lo dispuesto por el artículo 4º del Decreto Nº 367/16.

Seguidamente, y tras fundamentar la limitación de su intervención respecto de los términos jurídicos en los cuales se propone el proyecto de Acuerdo Integral para poner fin a las controversias vigentes, y a cuyos términos corresponde estar en honor a la brevedad, resalta algunos aspectos a los cuales considera debe prestarse debida atención.

Al respecto, señaló que: “... el análisis realizado advierte como puntos centrales para tener en cuenta a la manera en que se regula la debida participación de los usuarios frente a cada redeterminación anual tarifaria y/o las adecuaciones parciales; las limitaciones para ejercer los controles tarifarios y de otra índole que se incorporan; la manera de resolver los conflictos por la vía arbitral; y – fundamentalmente – el condicionamiento que se incorpora a las renunciaciones.

(...) y añadido, en lo que se refiere al ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO del ACUERDO INTEGRAL, cláusula

arbitral, que lo pactado – dada su aparente extensión para la resolución de todo conflicto contractual y/o regulatorio entre las partes – podría exceder los límites de la razonabilidad que debe presidirlo si se considerase que con ello vacía las facultades o herramientas del regulador; aún cuando pueda resultar afín a la solución jurisdiccional prevista en el régimen dispuesto recientemente por la Ley N° 27.328”.

Asimismo, destacó que, a su criterio, resulta jurídicamente viable la prosecución del trámite de aprobación del proyecto de acuerdo, con las recomendaciones y salvedades expuestas a lo largo de su dictamen.

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, es dable destacar la opinión vertida en el dictamen sub examine en orden a que: “(...) se debe dejar sentado que el presente asesoramiento también se realiza con ánimo transaccional, limitado a la posibilidad de que las partes acuerden una solución conjunta a sus reclamos recíprocos, y sin reconocer hechos y derechos a AUSOL y/o sus accionistas. En tal virtud, nada de lo que aquí se señale puede o debe ser considerado como un reconocimiento a la contraparte y/o sus accionistas para ser utilizado en las demandas y/o reclamos que se encuentran en curso”.

3. El 2 de febrero de 2018, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN emitió el Informe IF-2018-05661294-APN-SIGEN opinando que “...las presentes actuaciones en su trámite requieren la intervención del Secretario de Estado con competencia en la materia, así como la opinión del servicio jurídico del Ministerio de Transporte y en esa instancia, coincidiendo con la Procuración del Tesoro de la Nación, previa a la consideración de las actuaciones por parte del Ministerio, deberá glosarse por parte de la Autoridad de Aplicación un Informe Final, documento técnico integrador de las distintas intervenciones, dictámenes y estudios realizados, suscripto por los distintos responsables con conclusiones explícitas y la información necesaria que permita ponderar adecuadamente el Acuerdo Integral”.

Por otra parte, destacó la necesidad de incorporar información respecto de la totalidad de causas iniciadas por el concesionario y sus accionistas con origen en el contrato de Concesión, ello a fin de asegurar el cumplimiento de los desistimientos a los que se obligan.

Asimismo, sugirió limitar, con alguna pauta temporal o material, la facultad del Concesionario de dar por terminado “en cualquier momento” el Acuerdo Integral en el caso que una decisión o acto de cualquiera de los poderes u órganos del Estado “modifique o altere” dicho acuerdo, entendiendo al respecto que la amplitud de tal atribución podría desvirtuar el espíritu y la naturaleza del acuerdo que nos ocupa.

Por otra parte, advirtió que en el proyecto en trámite (art. 4.1,c) se ha establecido el derecho del concesionario a actualizar anualmente la Tarifa por aplicación del CER, considerando que este aspecto debería examinarse en orden a las previsiones de los artículos 7 y 10 de la Ley N° 23.928, modificados por el artículo 4 de la Ley N° 25.561.

Como última observación agregó que debería tomar intervención el MINISTERIO DE FINANZAS a través de los informes técnico-económicos y dictámenes jurídicos propios de las dependencias de dicha cartera ministerial.

Finalmente, y sin perjuicio de las recomendaciones y consideraciones formuladas, entendió que se dio cumplimiento con la intervención prevista en el artículo 4° del Decreto N° 367/16.

4. Posteriormente, a través de la Providencia PV-2018-09580399-APN-DD#MTR de fecha 6 de marzo de 2018, se expidió la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES del MINISTERIO DE TRANSPORTE, quien entendió que, previo emitir opinión en el ámbito de su incumbencia, y de acuerdo con lo preopinado tanto por la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN como por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, deberá agregarse a los presentes actuados un informe técnico integral con el correspondiente respaldo documental.

5. En tal sentido, por Informe IF-2018-12040013-APN-PYC#DNV tomó intervención la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES de esta DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, donde, tras describir los antecedentes del caso, desarrolló TRES (3) escenarios diferentes de

acuerdo a las siguientes premisas: “(1) calcular el monto compensatorio, o Monto Pendiente de Aplicación (MPA), que devuelva la TIR del PEF de oferta, también llamado escenario contractual. (2) calcular la inversión no amortizada de acuerdo al registro de inversión utilizando la metodología descrita en el Anexo F del Contrato de Concesión hasta diciembre de 2016; utilizando para el cálculo de la amortización el Plan Económico Financiero que respeta la TIR de oferta (calculada en el punto 1) o Escenario Contractual/Contable y (3) estimar los ingresos que dejó de percibir la Concesionaria por la pesificación de tarifas, que provocó diferenciales entre las tarifas contractuales y las que efectivamente se aplicaron. Escenario Ingresos NO percibidos”.

Corresponde hacer mención a las conclusiones arribadas a través del informe citado, el cual da cuenta del resultado de los TRES (3) escenarios propuestos, destacando que el primero de ellos, el escenario contractual, arrojaría un “monto MPA que equilibra la TIR del PEF de oferta = U\$S 3.337Millones”; el segundo, “Contractual/Contable: Inversión NO amortizada = U\$S 728Millones (incluyendo el 6% en concepto de utilidad”; y el último escenario “Ingresos NO percibidos (netos): Hasta 31/12/2016 = U\$S 733Millones (sólo considerando el PASADO)”.

Seguidamente, informa que podría considerarse la deducción del monto de las Multas y Actas de Constatación con resolución (con más sus intereses), adeudadas por AUTOPISTAS DEL SOL S.A., las cuales, valuadas al 15 de mayo de 2017, ascendería al importe de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA Y ÚN MILLONES QUINIENTOS MIL (USD 41,5 MM).

Finalmente, informa acompañar, a modo de respaldo documental, copia de la Resolución OCCOVI N° 444/02 con el registro de inversiones al 31/12/2001.

6.1. Corresponde también hacer mención respecto del trámite que nos convoca, que por Resolución de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD N° 83 del 16 de enero de 2018 se dispuso, en el marco del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual con AUTOPISTAS DEL SOL S.A, la convocatoria a Audiencia Pública a fin de posibilitar la participación ciudadana conforme lo establece el Artículo 5° del Decreto N° 367 del 16 de febrero de 2016.

6.2. La Audiencia Pública tuvo por objeto considerar, en el marco del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual con la concesionaria del Acceso Norte, AUTOPISTAS DEL SOL S.A, el nuevo régimen tarifario de los servicios.

6.3. La Audiencia Pública se llevó a cabo contemplando las previsiones del “Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional” aprobado por el Artículo 1° del Decreto 1.172 del 3 de diciembre de 2003, y fue convocada para el día 9 de febrero de 2018 en la localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires, en la sede del Teatro Municipal Lope de Vega, sito en la calle Pedro Lagrave 725.

6.4. Conforme lo estipulado en el Artículo 17° del “REGLAMENTO GENERAL DE AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL”, aprobado por el Artículo 1° del Decreto 1.172/2003, se originó el expediente electrónico EX-2018-03329663-APN-DNV#MTR.

6.5. La Resolución de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD N° 83 del 16 de enero de 2018 fue publicada el 17 de enero de 2018 en el BOLETÍN OFICIAL. Así también y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la mencionada resolución, se procedió a la publicación del aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública por DOS (2) días consecutivos en el BOLETÍN OFICIAL y en DOS (2) diarios de circulación nacional, cuyas constancias se agregaron en el expediente EX-2018-03329663-APN-DNV#MTR en los Números de Orden 3, 4, 5 y 8.

6.6. Fueron convocados especialmente a participar en la Audiencia Pública las autoridades nacionales, provinciales y municipales de las jurisdicciones involucradas, conforme constancias agregadas en el expediente electrónico mencionado en los números de Orden 10 al 37.

6.7. A los fines de la inscripción fue habilitado el Registro de Inscripción de Participantes en la página web

de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, desde el día 18 de enero de 2018 y hasta el día 6 de febrero del 2018, en el cual se inscribieron todos los interesados en formar parte en la Audiencia Pública.

La inscripción también pudo realizarse de manera presencial de lunes a viernes en el horario de 10:00 horas a 15:00 horas en la sede de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Mesa de Entradas de esta GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS, sita en Avenida Julio A. Roca 738, Piso 8° de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

6.8. Los interesados pudieron tomar vista de las actuaciones administrativas vinculadas al objeto de la Audiencia Pública, entre los días 18 de enero de 2018 y 6 de febrero de 2018 en la sede de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

6.9. Conforme las constancias del REGISTRO DE PARTICIPANTES resultaron inscriptos TREINTA Y NUEVE (39) participantes, según planilla obrante en el expediente electrónico EX2018-03329663-APNDNV#MTR en el Números de Orden 38.

6.10. La Audiencia fue registrada en forma taquigráfica y videograbada, realizándose asimismo el Acta correspondiente en la que se mencionan las intervenciones efectuadas por los representantes de esta DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, las autoridades presentes, los participantes registrados y de toda otra persona a quien le fuera concedida la palabra. La versión taquigráfica ha sido incorporada al Expediente electrónico antes mencionado en el Número de Orden N° 40.

-II- TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROYECTO

El proyecto de Acuerdo Integral sometido a consideración tiene por objeto concretar la Instancia de Revisión prevista en el Acuerdo de Renegociación Contractual y recomponer en forma definitiva el Contrato de Concesión del Acceso Norte a la Ciudad de Buenos Aires, además de fijar los términos y condiciones que regirán los derechos y obligaciones de las Partes.

Tal como se expusiera en el acápite I del presente, este Servicio de Asesoramiento se expidió con relación a dicho instrumento a través del Dictamen N° 63622/17, a cuyos términos corresponde estarse en honor a la brevedad.

También se han expedido sobre el proyecto de Acuerdo Integral tanto la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN como de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, emitiendo sus respectivos comentarios, observaciones y recomendaciones, sobre las cuales me he expedido ut supra, y a cuyos términos me remito.

En esta oportunidad, vuelven las presentes a consideración de esta Asesoría Letrada para una nueva intervención en virtud de haberse acompañado un proyecto de Acuerdo Integral cuyo texto habría sido modificado en orden a las observaciones y recomendaciones formuladas por las intervenciones precitadas.

Del análisis efectuado al proyecto en análisis, esta GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS puede advertir que algunas de las mencionas observaciones y recomendaciones de la PTN y la SIGEN, han sido, en consecuencia, receptadas e incorporadas al texto del Acuerdo Integral.

En esencia, dichas incorporaciones se refieren a: (i) modificaciones meramente formales en cuando a la redacción del texto y otras modificaciones conforme recomendaciones de la PTN (ii) modificación en el GLOSARIO del alcance de los términos de la definición de “Conceptos Corrientes”, “Impuestos”, “Impuesto a las Ganancias”, “Impuesto a las Ganancias Computable”, “Medida Pública”, “Reserva suficiente” y “Semestre”; (iii) incorporación en el GLOSARIO de los términos “Evento Disruptivo” y “Régimen Tarifario”; (iv) modificación en el GLOSARIO de “Inversión Reconocida” por el término “Inversión Bruta”; (v) incorporación en el inciso 4.6 del procedimiento previo a la redeterminación tarifaria que contemple la Participación Ciudadana; (vi) incorporación del inciso 4.9, por el cual se prevé el pago a la Concesionaria, en los términos y condiciones allí expuestos, en caso de no poder aplicar plenamente las

tarifas como consecuencia de una medida pública; (vii) modificación en el texto del inciso 7.5 (b) respecto de los fondos depositados en la cuenta remanente y la ausencia de conceptos adeudados; (viii) modificaciones en la redacción del inciso 9.4 en lo relativo a los casos donde subsistan diferencias entre las partes en la revisión anual de determinaciones, actualizaciones y redeterminaciones tarifarias; (ix) incorporación al texto del inciso 14.1 (b) en lo atinente a la continuidad de los contratos de las áreas de servicios; (x) incorporación al texto del inciso 15.1 y 15.3 de la declaración del concesionario por el cual garantiza y declara que la lista completa respecto a la totalidad de los reclamos existentes a la fecha de firma del acuerdo y promovidos por éste, así como la totalidad de los reclamos y demandas de sus accionistas, se encuentran listados en los Anexos XVII-A y XVII-B, respectivamente; (xi) incorporación del inciso 16.8; (xii) incorporación del artículo 19, “Rescisión por Evento Disruptivo”.

-IV- ALCANCE DEL PRESENTE ASESORAMIENTO

Así las cosas, vuelven los presentes a esta Asesoría Letrada, requiriéndose una nueva intervención con relación al proyecto de Acuerdo de Revisión Integral a celebrar con la empresa AUTOPISTAS DEL SOL S.A., concesionaria del Acceso Norte a la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de finalizar el proceso de renegociación contractual del contrato de Concesión que la vincula con el Estado Nacional, y con miras a dar cumplimiento a la manda dispuesta por el Decreto N° 367/16.

Liminalmente, y tal como se expusiera en el acápite I, resulta necesario poner de manifiesto que esta GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS ha emitido su opinión conforme los términos que surgen de los Dictámenes Nros. 62070/16, 63167/17 y 64573/17, donde se formularon una serie de consideraciones y se señalaron diversas conclusiones, las cuales guardan directa relación con el proyecto de acuerdo actualmente en curso y que ha sido reseñada ut-supra, motivo por el cual las mismas resultan de vigencia y aplicabilidad al sub examine, y corresponde tenerlos por reproducidos en el presente asesoramiento.

Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde recordar que tanto el proyecto en consulta como los informes técnicos agregados a los presentes actuados, contienen una serie de consideraciones de índole técnica y/o económica, motivo por el cual esta Asesoría Letrada no habrá de emitir opinión respecto de su viabilidad y/o conveniencia, por constituir todas éstas cuestiones que deberán ser analizadas de conformidad con los informes técnico-económicos de las áreas con competencia específica en la materia.

En lo que hace a todas estas cuestiones, esta GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS debe ceñirse a expresa doctrina de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, que tiene dicho que las cuestiones de carácter técnico y/o económicas, son ajenas a la materia a dictaminar, debiendo estarse a los informes técnicos de las áreas con competencia específica. “La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad con los informes de los especialistas en la materia, sin que este organismo entre a considerar tales aspectos por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica” (Dictámenes 199:119 y 241:207, entre otros de la Procuración del Tesoro de la Nación).

En tal sentido, “Excede la esfera de sus atribuciones abrir juicio sobre las cuestiones de carácter técnico-económico que otorgan fundamentos a los proyectos que se ponen a su consideración, máxime si han sido objeto de análisis por las oficinas técnicas con competencia específica” (v. Dictámenes 244:466; 244:468; 244:854).

La concreción de tales referencias técnico-económicas en el proyecto cuya suscripción se propone, ha sido producto de una negociación llevada adelante con la Concesionaria del Acceso Norte, tal cual surge del expediente, resultando igualmente ajeno al cometido de este Servicio de Asesoramiento ponderar dicho proceso negociador en tanto expresión de una actividad política enmarcada dentro de parámetros discrecionales.

En tal sentido, el juicio sobre la decisión contenida en el proyecto propiciado conforma una cuestión de prudencia política ajena a los límites propios de la competencia funcional de esta Asesoría Letrada.

Ahora bien, con relación al nuevo texto proyectado, y tal como se expusiera en el acápite precedente, puede advertirse que algunas de las observaciones y recomendaciones formuladas por la PTN y la SIGEN habrían sido receptadas e incorporadas al texto del proyecto de Acuerdo Integral.

Por otra parte, y de acuerdo a lo reseñado en el acápite I del presente dictamen, se ha dado cumplimiento en el marco del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual con AUTOPISTAS DEL SOL S.A, con la realización de la Audiencia Pública a fin de posibilitar la participación ciudadana conforme lo establece el Artículo 5° del Decreto N° 367 del 16 de febrero de 2016.

En cuanto a la competencia de esta Repartición para suscribir el proyecto de Acuerdo Integral en consulta, corresponde poner de resalto que la Cláusula Decimosexta “SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS” del Acuerdo de Renegociación Contractual del Acceso Norte a la Ciudad de Buenos Aires, ratificado por Decreto N° 296/2006, dispuso en su Apartado 16.2. que la ex SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN y el entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, actuando dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, “...deberán proceder al dictado de los actos y al desarrollo de los procedimientos que resulten necesarios para la instrumentación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el ACUERDO”.

Por su parte, el Apartado 16.2 del Acuerdo de Renegociación Contractual – Dto. 296/06- asignaba dicho cometido a la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS toda vez que la misma se encontraba investida con el carácter de Autoridad de Aplicación del Contrato de Concesión del Acceso Norte, conforme surge de la PARTE SEGUNDA “GLOSARIO” del referido Acuerdo de Renegociación Contractual: “A los efectos interpretativos, los términos utilizados en el presente tendrán el significado asignado en el glosario que se detalla a continuación: (...) AUTORIDAD DE APLICACIÓN DEL ACUERDO: La Secretaría de OBRAS PÚBLICAS dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS DE LA NACIÓN”.

Mediante el dictado del Decreto N° 1.020 de fecha 30 de julio de 2009 se instituyó a esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD como Autoridad de Aplicación de, entre otros, el Contrato de Concesión del Acceso Norte.

Posteriormente, a través del dictado del Decreto N° 27 del 10 de enero de 2018, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dispuso la transferencia de las competencias, objetivos y funciones del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES a esta Repartición; como así también estableció que “...la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD será la Autoridad de Aplicación de los contratos de concesiones viales vigentes y de los que se otorgaren en el futuro.”.

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta repartición es la Autoridad Administrativa competente para la suscripción del proyecto bajo estudio, en cumplimiento de lo prescripto por el Apartado 16.2 del Acuerdo de Renegociación Contractual del Acceso Norte, por el Decreto – ley N° 505/58, ratificado por Ley N° 14.467, y en virtud del Decreto N° 27/18.

Por su parte, con la suscripción y posterior ratificación por el PODER EJECUTIVO NACIONAL se estaría dando cumplimiento a las previsiones contenidas en el Decreto N° 367/16, así como también a lo previsto por la Cláusula Séptima del Acuerdo de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión del Corredor Acceso Norte – Dto. 296/06 -, el cual dispone que: “(...) Para la entrada en vigencia del nuevo ACUERDO a que se arrije en dicha instancia, se deberá cumplir con los procedimientos establecidos legalmente y la aprobación del PODER EJECUTIVO NACIONAL (PEN)”.

V-CONCLUSIONES

Con lo expuesto, habiendo ya tomado intervención en los presentes actuados tanto la PROCURACIÓN

DEL TESORO DE LA NACIÓN como la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, es opinión de esta Asesoría Letrada que corresponde la prosecución del presente trámite en orden a lo normado por el Decreto N° 367/16, a fin de contar con el asesoramiento jurídico del MINISTERIO DE TRANSPORTE y la correspondiente intervención del MINISTERIO DE FINANZAS (art. 4° del Decreto N° 367/16), debiendo dejarse sentado que el presente asesoramiento se encuentra sujeto a la opinión jurídica de las futuras intervenciones que le corresponden a los Servicios Jurídicos de las referidas carteras ministeriales.